

# Del despilfarro al dirigismo económico

La ANSeS y las empresas estatales plantean problemas más serios que la ineficiencia administrativa

*Por Adrián Lucardi*

**Este Documento es producto de la preocupación que genera en la Argentina esta creciente tendencia a favor de un estado intervencionista y empresario, y por ello contiene tanto una crítica a las empresas estatales como una propuesta para abandonar el debate privatización vs. estatización, y concentrarse en la cuestión de cómo despolitizar el funcionamiento de las empresas que ya son estatales. Porque, si bien las empresas públicas son desaconsejables en sí mismas, aquellas que se manejan con criterios políticos lo son aún más. En ese sentido, independizar el manejo de las empresas estatales del oficialismo de turno no sólo resulta aconsejable por motivos de eficiencia, sino también como una forma de limitar y controlar a las autoridades políticas. El caso de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) es particularmente relevante en esta discusión, porque ofrece un ejemplo paradigmático de los problemas que plantea la administración estatal de la economía.**

**Adrián Lucardi** es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Asistió en la elaboración de la “Primera Encuesta de Expertos en Política Provincial” (Argentina) y fue seleccionado con una Beca por la Comisión Fulbright y la Fundación Universitaria del Río de la Plata para participar en el “Seminario Internacional para Jóvenes Líderes” dictado en Río Cuarto, Argentina, 2006, y en el “Fulbright Argentina Institute on Leadership and American Studies”, Delaware, Estados Unidos, 2007. Es Licenciado Summa cum laude en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés.



**1. Introducción.** En los últimos años parece haberse instalado en la sociedad argentina la idea de que la provisión de los servicios básicos (agua, electricidad y gas; curiosamente, la telefonía celular no está incluida en la lista) y la administración de las empresas “estratégicas” (aerolíneas, petroleras, etc) debería estar a cargo del Estado. Las críticas al “modelo neoliberal” aplicado en la década de los noventa –identificada con una ola de privatizaciones que habrían fracasado estrepitosamente, se han convertido en un lugar común que el kirchnerismo aprovechó para avanzar con su modelo estado-céntrico: desde 2003, los Kirchner crearon la empresa Enarsa y reestatizaron el Correo Argentino, AySA y Aerolíneas Argentinas (aunque en este último caso la estatización está frenada por falta de acuerdo respecto al precio a pagar por la compañía, lo que no impide que el gobierno siga subsidiando las operaciones deficitarias de la misma)<sup>1</sup>. Además, a principios de este año se hizo circular la versión (que quizás no fue más que un “globo de ensayo”, pero que de ninguna manera sonó inconcebible) de que se estaba estudiando la creación de un organismo estatal que monopolizaría el comercio exterior de granos<sup>2</sup>. En ese ámbito, el kirchnerismo tiene el apoyo de la ciudadanía: según un estudio de opinión pública de Carlos Fara & Asociados realizada en el Gran Buenos Aires entre el 22 y el 24 de junio, el 55% de los respondientes está de acuerdo con la decisión del gobierno nacional de estatizar las AFJP, y el 65% aprueba la estatización de Aerolíneas Argentinas<sup>3</sup>. La derrota del 28 de junio no es un rechazo al modelo estatista del gobierno, sino más bien a su lógica confrontacional, sus malos modales y su escaso respeto por las instituciones. Por eso durante la campaña electoral los candidatos opositores generalmente no cuestionaron el modelo económico, sino que se limitaron a criticar sus manifestaciones más desagradables, como la inflación, la prepotencia del Secretario de Comercio Guillermo Moreno, o las retenciones al campo. De ahí que, cuando el oficialismo trató de plantear los comicios legislativos del pasado 28 de junio como una elección entre “dos modelos”, el actual y el “neoliberal”, la estrategia fallara: ninguno de los principales candidatos opositores parecía muy convencido de los beneficios de un modelo basado en una mayor apertura económica y en un estado limitado a la provisión de seguridad, justicia, salud y educación.

Por supuesto, esto no resulta sorprendente en un candidato como Fernando “Pino” Solanas, confeso simpatizante del chavismo y el castrismo, defensor del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y decidido partidario del nacionalismo económico y la “recuperación de los recursos naturales”<sup>4</sup>.

Pero las palabras de Francisco De Narváez, el millonario empresario que financió la campaña de Carlos Menem en 2003, resultan más sorprendentes. Según él, deben ser estatizadas todas las empresas “*que brindan los servicios públicos. El agua, la distribución de la energía, indudablemente la del transporte*”, porque “*hay que tener servicios sociales de calidad y eso lo tiene que garantizar el Estado*”<sup>5</sup>. Tal vez estas palabras no sean más que un gesto de oportunismo político por parte de De Narváez, pero en

ese caso estarían reflejando la fuerza con que la sociedad aceptó la idea de que un Estado activo y empresario es indispensable para que las cosas funcionen bien.

Este Documento es producto de la preocupación que genera esta creciente tendencia a favor de un estado intervencionista y empresario, y por ello contiene tanto una crítica a las empresas estatales como una propuesta para abandonar el debate privatización vs. estatización, y concentrarse en la cuestión de cómo despolitizar el funcionamiento de las empresas que ya son estatales. Porque, si bien las empresas públicas son desaconsejables en sí mismas, aquellas que se manejan con criterios políticos lo son aún más. En ese sentido, independizar el manejo de las empresas estatales del oficialismo de turno no sólo resulta aconsejable por motivos de eficiencia, sino también como una forma de limitar y controlar a las autoridades políticas.

**2. Las limitaciones de las empresas estatales.** En sí mismas, las empresas estatales son desaconsejables, por varios motivos. Primero, sus administradores tienen menos incentivos para hacer las cosas bien: un empresario que arriesga su propio patrimonio está mucho más motivado por hacer funcionar su empresa que un director que administra el dinero de otros.

En segundo lugar, las empresas privadas mal administradas están forzadas a desaparecer del mercado o a conseguir fondos de inversores que acepten correr el riesgo de invertir en ellas, mientras que las empresas públicas mal administradas usualmente cubren sus déficits con fondos provenientes de impuestos –en otras palabras, el dinero de los contribuyentes se usa para subsidiar la ineficiencia.

Y tercero, incluso si las empresas públicas no fueran subsidiadas y pudieran quebrar, su situación no sería equiparable a la de las empresas privadas. Cuando éstas quiebran, lo que se pierde es el dinero que una persona privada decidió arriesgar, mientras que si una empresa pública quiebra, se pierden los fondos aportados no voluntariamente por los contribuyentes.

Hay que reconocer, sin embargo, que no todas las empresas públicas son iguales: no es lo mismo una empresa de propiedad estatal administrada como si fuera una empresa privada (como sucede, por ejemplo, con la brasileña Petrobras), que una que se administra según las necesidades políticas del gobierno de turno. En este último caso, a los inconvenientes de todas las empresas públicas se agregan varios más. Primero, es posible que los consumidores sean discriminados por motivos puramente políticos: por ejemplo, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Defensa recientemente firmaron un acuerdo por el cual todos los empleados de dicho organismo tendrán un 15% de descuento para sus pasajes en la aerolínea, incluso cuando viajen por motivos personales<sup>6</sup>. Esto implica no solamente una discriminación injusta en contra de algunos consumidores, sino que además perjudica al que produce y genera riqueza en detrimento del que tiene contactos políticos y puede beneficiarse con el dinero aportado por los contribuyentes. Esto hace que la gente dedique cada vez más tiempo y esfuerzos a conseguir un trabajo en el estado, ya que la

estabilidad laboral es alta, la exigencia es poca y de yapa es posible comprar pasajes baratos: el costo lo pagan las empresas privadas, a las que les resulta más caro contratar buenos empleados.

Segundo, una empresa administrada de acuerdo con criterios políticos probablemente sea deficitaria, ya que coloca a la obtención de ganancias en un segundo plano. El problema con esto es que una empresa que puede financiarse con dinero de los contribuyentes puede vender bienes al costo o a pérdida para que resulten más baratos, lo que implica una competencia desleal en contra de las compañías no subsidiadas.

Y tercero, como en el mercado las transacciones son voluntarias, los vendedores están obligados a ofrecer productos atractivos, y a buen precio, si quieren obtener ganancias. Pero las empresas públicas manejadas con criterios políticos pueden prescindir de la necesidad de ofrecer mejores productos, y en cambio beneficiarse de la capacidad del estado para imponer regulaciones o sanciones a determinadas compañías. Por ejemplo, el actual Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se ha hecho cargo de la administración de la papelera Massuh y, para asegurar que el negocio funcione, ha “convencido” a los dueños de diversos supermercados –supermercados que son regulados por la Secretaría que él mismo dirige– para que compren sus productos y los exhiban en los lugares más atractivos de las góndolas<sup>7</sup> –lo que coloca en una clara situación de desventaja a las papeleras que no pueden presionar del mismo modo a sus compradores.

**3. Estado “grande” vs. estado “dirigista”.** Lo que esto último significa es que las empresas públicas pueden plantear problemas mucho más graves que el despilfarro, la asignación ineficiente de recursos, o la corrupción: cuando el estado es dueño de demasiadas empresas y éstas se administran de acuerdo con criterios políticos, el gobierno tiene la posibilidad de “politizar” la economía, es decir de obligar a los empresarios privados a actuar de acuerdo con criterios políticos. La economía de mercado permite aumentar la productividad (y con ello la calidad de vida de las personas) porque los individuos obedecen incentivos económicos: al comprar donde es más barato, e invertir donde la rentabilidad es mayor, asignan los recursos escasos con mayor eficiencia, permitiendo que la riqueza total de la economía se incremente. En ese contexto, si la intervención estatal se limita al cobro de impuestos para financiar el gasto público, el despilfarro podrá ser muy grande, pero el mecanismo de ajuste del mercado permanecerá relativamente intacto y por ende permitirá que el resto de los recursos se asignen eficientemente y la productividad de la economía sea mayor. En cambio, si el gobierno no se limita a cobrar impuestos, sino que además pretende *dirigir* la economía, o sea decirle a las empresas qué deben producir, cuánto, y para quién, el mecanismo de ajuste del mercado deja de funcionar: la asignación ineficiente de recursos no se castiga con pérdidas, y los incentivos de los actores se concentran, no en obtener ganancias brindando servicios a otros, sino

en cultivar contactos políticos que garanticen contratos, subsidios o empleos.

En otras palabras, no necesariamente es lo mismo un estado “grande”, es decir un estado cuya presión impositiva es alta pero uniforme (o un estado que controla muchas empresas privadas, pero que se administran con independencia del poder político), que un estado que pretende reemplazar al mercado en la asignación de recursos. Los impuestos elevados son indeseables, por supuesto, pero si son uniformes, simplemente van a castigar a los productores más ineficientes (y probablemente también hagan florecer el mercado negro); en contraste, un estado dirigista generalmente termina *premiando* a los productores más ineficientes, como sucede cuando auxilia a una empresa a punto de quebrar para evitar que se pierdan puestos de trabajo. Cuando existe la decisión política de abaratar determinados bienes de consumo y/o ayudar a los desempleados, la mejor alternativa no pasa por decirles a las empresas qué hacer, sino por otorgar subsidios: así se brinda un servicio uniforme para todos los beneficiarios, y se evita la discriminación en favor de quienes no cuentan con contactos políticos.

**4. El caso de la ANSeS.** El caso de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) es particularmente relevante en esta discusión, porque ofrece un ejemplo paradigmático de los problemas que plantea la administración estatal de la economía. En primer lugar, la ANSeS es un organismo de naturaleza fundamentalmente técnica y no política: su función no consiste en implementar la política económica decidida por el gobierno, sino en preservar los aportes de los trabajadores a fin de asegurarles su jubilación futura (y por eso no se financia con “impuestos”, sino con “aportes”).

Segundo, desde la estatización de las AFJP en noviembre de 2008, la administración de la ANSeS ha incurrido en todos los vicios que se le cuestionan a las empresas estatales: las decisiones se toman en base a criterios políticos<sup>8</sup>, lo que deja de lado la rentabilidad y compromete los haberes de los futuros jubilados; y los controles y la transparencia brillan por su ausencia. En efecto, luego de la estatización de las AFJP, la ANSeS usó buena parte de los 101 mil millones de pesos con que cuenta su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para colaborar con la política gubernamental: financió proyectos de obras públicas, creó planes de “reactivación del consumo”, ayudó a empresas en crisis para que no despidieran empleados<sup>9</sup>, financió los gastos corrientes del gobierno nacional, prestándole a tasas muy inferiores a las de mercado<sup>10</sup>, e incluso participó en la campaña electoral enviando cartas donde se elogiaba la política previsional del oficialismo<sup>11</sup>. El propio director del organismo, Amado Boudou, reconocía que la ANSeS ha abandonado su tarea de controlar los ahorros de los jubilados para convertirse en un organismo dedicado a financiar a tasas artificialmente bajas los proyectos que el gobierno considera prioritarios<sup>12</sup>, lo que por otra parte es obvio si se tiene en cuenta que la tasa de interés de los préstamos otorgados por la ANSeS es muy inferior a la inflación real<sup>13</sup>.

El comportamiento de la ANSeS no ha sido mucho más elogiado en lo que hace a la transparencia en el manejo de los fondos. Es sintomático, por ejemplo, que la estatización de las AFJP se produjera en noviembre de 2008, pero Boudou recién compareciera ante el Congreso para informar sobre el estado del FGS el 20 de mayo de 2009, casi seis meses después<sup>14</sup>. Además, la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, cuya función consiste precisamente en controlar el manejo del FGS, recién se integró el 13 de mayo de 2009, porque el oficialismo demoraba el trámite en el Congreso<sup>15</sup>, en tanto que el “Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, encargado de controlar los activos del FGS y cuya creación se había dispuesto en 2007, recién se integró el 22 de julio pasado: prácticamente todos sus miembros responden al oficialismo<sup>16</sup>. La información disponible en internet también es muy escasa: el powerpoint de la presentación de Boudou ante el Congreso se encuentra en la página web de la ANSeS, pero resulta difícil de localizar<sup>17</sup>, y al 27 de julio pasado la página de la Comisión Bicameral de Control se encontraba “en construcción”.

El mayor problema que plantea la ANSeS, sin embargo, no es la mala administración de los recursos del FGS, sino su capacidad de influir sobre el comportamiento de las 44 empresas privadas en las que es accionista, en 16 de las cuales había nombrado directores y/o síndicos al 15 de abril pasado (ver Anexos A y B). Esto se debe a que, al estatizarse las AFJP, todos los activos de las mismas, incluyendo las acciones que controlaban, pasaron a manos de la ANSeS. Por ley, ninguna AFJP podía contar con más del 5% del capital accionario de una compañía, pero como la ANSeS acumuló las participaciones de varias AFJPs, sus porcentajes son mucho mayores, y en la actualidad controla un quinto o más de las acciones de 14 empresas (Anexo A).

Esto le otorga al gobierno la posibilidad de politizar la economía mucho más de lo que ya está, haciendo que no sólo las empresas estatales y los entes públicos autónomos se comporten de acuerdo con criterios políticos, sino también que las empresas privadas queden sujetas a la misma lógica, a través de mecanismos tales como la prohibición de realizar despidos, la obligación de comprar a determinados proveedores y/o de financiar emprendimientos políticamente rentables pero de escasa racionalidad económica; o, más grave aún, obstaculizando constantemente la administración de una compañía para reducir su precio, permitiendo que un empresario amigo la compre muy barata, o bien sea posible estatizarla a un costo mínimo. Ninguno de estos mecanismos resulta novedoso para el kirchnerismo, que ha acudido a cada uno de ellos al menos una vez:

a) En Aerolíneas Argentinas, el accionar conjunto del gobierno y de los gremios aeronáuticos erosionaron la rentabilidad de la compañía hasta el punto que el congreso pudo estatizarla a costo cero (pero haciéndose cargo de una millonaria deuda)<sup>18</sup>. Y pese a que la administración de la compañía no ha probado ser especialmente eficiente –Aerolíneas Argentinas pierde alrededor de US\$ 2 millones por día<sup>19</sup>–, el gobierno impide que empresarios

privados dispuestos a arriesgar su dinero puedan brindar servicios de transporte aéreo<sup>20</sup>.

- b) En diciembre de 2008, el gobierno decidió intervenir la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN). Al poco de asumir el interventor, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentó una denuncia penal contra los directivos de la compañía por haber declarado el default de manera irregular<sup>21</sup>, denuncia que luego fue desestimada por la justicia<sup>22</sup>. Los motivos por los que se decidió la intervención de la empresa nunca quedaron claros, pero entre las alternativas que se barajaron estuvieron la de “bajarle el precio” para venderla a un empresario amigo, o el deseo de vengarse del grupo Techint, uno de los principales accionistas de TGN, por haber perjudicado al gobierno en el caso Skanska.
- c) Cuando la empresa Papelera Massuh, altamente endeudada, estaba muy cerca de quebrar, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, decidió la creación de un fideicomiso para administrar la empresa y salvar los puestos de trabajo, y usó su influencia para “convencer” a varios supermercadistas de que compraran su producción con preferencia a la de otras papeleras<sup>23</sup>. La misma metodología se aplicaría con la planta que la empresa autopartista Mahle tiene en Rosario, y la de pinturas que Tersuave posee en Villa Mercedes (San Luis)<sup>24</sup>.
- d) Actualmente, el gobierno está usando el poder regulador de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para forzar a Telecom Italia a vender su participación accionaria en Telecom Argentina a algún empresario amigo<sup>25</sup>.

En otras palabras, el accionar del gobierno hace que los empresarios más exitosos no sean quienes brindan los mejores bienes y servicios, sino aquellos que cuentan con mejores contactos políticos: ser creativo, eficiente o capaz de detectar a tiempo nuevas oportunidades de inversión paga menos que tener contactos en el gobierno. Al despilfarro característico del sector público argentino se agregan los incentivos perversos que se generan para las empresas privadas, que encuentran más rentable invertir en abogados que hagan lobby que en ingenieros que diseñen mejores productos; y a ello se suman los costos de eficiencia debidos al *dirigismo*, es decir al predominio de las consideraciones políticas a la hora de decidir qué, cuándo, dónde y cómo producir. En la medida en que este modelo persista, la productividad se resentirá, la calidad de los bienes consumidos en el país disminuirá, y la economía se cerrará al mundo, porque los empresarios usarán su influencia política para presionar por medidas proteccionistas.

**5. Conclusión.** Ahora bien, esta forma particularmente perversa de intervención estatal que llamamos “dirigismo” sólo es posible en la medida en que la burocracia pública esté altamente politizada y/o que existan muchas empresas públicas que no sean independientes del poder político de turno. Una burocracia que toma decisiones de manera impersonal es menos arbitraria que una altamente politizada<sup>26</sup>, y una empresa estatal administrada de forma

independiente es mucho menos proclive a tomar decisiones en base a criterios políticos. Lo mismo sucede, por supuesto, con la ANSeS: si se tratara de un organismo realmente independiente del gobierno de turno, no sólo estaría mejor capacitado para proteger los ahorros de los jubilados, sino que además el riesgo de que use sus tenencias accionarias para satisfacer objetivos políticos sería mucho menor. Más aún, garantizar la independencia de las empresas públicas, y de los organismos como el Indec o la ANSeS es una forma de limitar el poder estatal y, por ende, de garantizar las libertades individuales: entre los intelectuales de izquierda es común criticar a los “grupos económicos concentrados”, pero pocos parecen advertir que en Argentina ningún grupo económico está más concentrado, ni es más poderoso, que el propio estado. La independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es condición necesaria para desconcentrar el poder estatal, pero ello no alcanza si no se independizan aquellos organismos y empresas que son nominalmente autónomas pero que en los hechos dependen del poder ejecutivo.

En suma, hay que abandonar la discusión sobre si las empresas deben ser públicas o privadas, y concentrarse en mejorar el funcionamiento de los entes públicos autónomos y las empresas que ya son estatales. Para quienes estamos preocupados por el creciente avance del estatismo, esta estrategia ofrece varias ventajas:

- a) Las empresas que solamente son públicas, aunque cuestionables, plantean menos problemas que aquellas que están politizadas;
- b) Seguir estatizando empresas no va a mejorar la calidad del servicio que reciben los consumidores, pero una administración más eficiente y profesional sí va a permitir poner al estado “al servicio de la gente”;
- c) En lugar de esperar la llegada de un gobernante angelical, conviene atar las manos de los que no lo son: en la medida en que la ANSeS y las empresas estatales no sean independientes del poder político de turno, cualquier gobierno, y no sólo el kirchnerismo, podrá utilizarlas con fines políticos; y
- d) El gobierno fue derrotado en las elecciones del 28 de junio, pero probablemente conserve la mayoría legislativa hasta el 10 de diciembre, y después de esa fecha muchos de sus opositores quedarán a su izquierda, por lo que presionarán por una política más estatista. Si, como se señaló al comienzo de este documento, buena parte de la población parece creer que las empresas de servicios deberían ser públicas, no conviene librar una batalla perdida, sino más bien correr el eje del debate hacia otras cuestiones, sobre las que también puede haber amplio consenso: ¿o acaso alguien cree que la burocracia argentina es eficiente y satisface las necesidades e inquietudes de los ciudadanos?

#### Notas:

<sup>1</sup> [“La Argentina vuelve a tener una petrolera del Estado”](#) (*La Nación*, 21/10/04); [“Crean una empresa estatal para manejar el Correo”](#) (*La Nación*, 16/06/04); [“Finalmente, el Congreso ratificó la creación de AySA”](#) (*La Nación*, 17/05/06); [“Está cerca un acuerdo con Marsans”](#) (*La Nación*, 09/06/09).

<sup>2</sup> [“Analiza el Gobierno estatizar todo el comercio de granos”](#) (*La Nación*, 27/02/09).

<sup>3</sup> “Situación electoral Gran Buenos Aires – Informe para clientes”, Carlos Fara & Asociados, junio de 2009.

<sup>4</sup> [“Pino Solanas, ‘visitante distinguido’ en Santiago de Cuba”](#) (Sitio oficial de Fernando “Pino” Solanas, 12/03/07); [“Palabras de Fernando ‘Pino’ Solanas en ocasión del encuentro de Hugo Chávez con intelectuales y dirigentes sociales y políticos”](#) (Sitio oficial de Fernando “Pino” Solanas, 01/02/05); [“D’Elía viajó a Irán y dará un documento de apoyo”](#) (*La Nación*, 25/02/07).

<sup>5</sup> [“Creo que YPF, Edenor, Edesur y Metrogas deberían ser estatales”](#) (*Clarín*, 24/06/09). De todos modos, De Narváez aclaró su posición contraria a la estatización de Aerolíneas: *“Yo no tengo una posición en términos de que las empresas de servicios públicos tienen que ser privadas o estatales. Lo que sí tengo es una clara posición en el tema Aerolíneas: en diez meses tienen gastado más de 1.746 millones de pesos, con un desmanejo muy claro. Yo no me sentí más argentino el día que Aerolíneas fue estatizada ni me sentía menos argentino cuando Aerolíneas era de los españoles.”*

<sup>6</sup> “Aerolíneas: insólito descuento para los empleados de Defensa”, *Ámbito Financiero*, 29/06/09, p. 31.

<sup>7</sup> [“El Gobierno busca rescatar más empresas del sector privado”](#) (*La Nación*, 13/05/09).

<sup>8</sup> Cuando, durante su presentación ante el Congreso el 20 de mayo pasado, una diputada opositora le pidió detalles sobre la instrumentación de algunos proyectos que financiaría la ANSeS, su director, Amado Boudou, le respondió que *“la Presidenta ya nos contará”* ([“Admiten que los fondos jubilatorios son usados para enfrentar la crisis”](#), *La Nación*, 21/05/09).

<sup>9</sup> [“Aluar amplía su capital y quiere que la Anses ponga US\\$ 25 millones”](#) (*La Nación*, 30/04/09); [“Las obras del tren Sarmiento se harán con plata de jubilaciones”](#) (*Clarín*, 18/05/09); [“Financian a General Motors con US\\$ 70 millones de la Anses”](#) (*La Nación*, 05/06/09); [“La Anses financiará 90% del Plan Vial Nacional”](#) (*La Nación*, 24/06/09).

<sup>10</sup> [“Sin crédito, el Gobierno tuvo que endeudarse fuerte con el Estado”](#) (*La Nación*, 03/01/09); [“El Gobierno toma cada vez más plata de organismos públicos”](#) (*Clarín*, 27/03/09); [“El Gobierno se financia cada vez más con la plata de los jubilados”](#) (*Clarín*, 23/04/09); [“Posterga el Gobierno el pago de una deuda con la Anses”](#) (*La Nación*, 04/05/09); [“Un organismo oficial que opera como salvavidas”](#) (*La Nación*, 18/05/09).

<sup>11</sup> [“La Anses, con el discurso de campaña”](#) (*La Nación*, 25/06/09).

<sup>12</sup> [“Boudou insiste: antes que la rentabilidad está el empleo”](#) (*La Nación*, 29/05/09).

<sup>13</sup> [“La Anses deposita la plata a tasas negativas”](#) (*La Nación*, 23/12/08); [“Estiman en un 10% la ganancia por inversiones”](#) (*La Nación*, 14/05/09); [“En el uso de sus recursos, la Anses posterga a los jubilados”](#) (*La Nación*, 14/06/09).

<sup>14</sup> [“Admiten que los fondos jubilatorios son usados para enfrentar la crisis”](#), *La Nación*, 21/05/09).

<sup>15</sup> [“Siguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados”](#) (*La Nación*, 20/04/09); [“Ponen en marcha controles a la Anses”](#) (*La Nación*, 14/05/09).

<sup>16</sup> [“Para controlar la Anses, crean un consejo que despierta sospechas”](#) (*La Nación*, 22/07/09).

<sup>17</sup> [http://www.anses.gov.ar/prensa/noticias/2009/mayo/informe\\_bicameral/pages/Diapositiva1.htm](http://www.anses.gov.ar/prensa/noticias/2009/mayo/informe_bicameral/pages/Diapositiva1.htm) (y ss.) La página web de la ANSeS ([www.anses.gov.ar](http://www.anses.gov.ar)) está casi exclusivamente dedicado a informar sobre trámites previsionales, y a cubrir las apariciones públicas de Amado Boudou.

**Anexo A: Participación accionaria de la ANSeS en empresas privadas, al 15/04/09**

#	Empresa	Rubro	% capital social	¿Se nombró director?
1	S.A. San Miguel	Agronegocios	26,96%	Sí
2	Banco Macro	Bancario	26,85%	Sí
3	Gas Natural BAN	Petróleo, Gas y Petroquímica	26,63%	Sí
4	Consultatio S.A.	Bienes Raíces	26,62%	Sí
5	Edenor S.A.	Electricidad	26,40%	Sí
6	Distribuidora de Gas Cuyana	Petróleo, Gas y Petroquímica	26,12%	Sí
7	Siderar S.A.	Siderúrgica	25,97%	Sí
8	Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.	Telecomunicaciones - Medios	24,98%	
9	Transportadora de Gas del Sur S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	23,10%	Sí
10	Grupo Concesionario del Oeste	Transporte - Infraestructura	21,56%	
11	Mirgor S.A.	Transporte - Infraestructura	21,54%	
12	Emdersa S.A.	Electricidad	20,96%	
13	Grupo Financiero Galicia S.A.	Bancario	20,43%	
14	Imp. Y Exp. de La Patagonia S.A.	Agronegocios	20,24%	
15	Molinos Río de La Plata S.A.	Agronegocios	19,92%	
16	Pampa Energía S.A.	Electricidad	19,35%	
17	Transener S.A.	Electricidad	18,78%	Sí
18	Socotherm Americas S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	18,59%	
19	Solvay Indupa S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	16,71%	Sí
20	Banco Patagonia S.A.	Bancario	14,66%	
21	Petrobras Energía Participaciones S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	14,37%	
22	Endesa Costanera S.A.	Electricidad	13,40%	Sí
23	Camuzzi Gas Pampeana S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	12,65%	Sí
24	Aluar Aluminio Argentino S.A.	Siderúrgica	11,80%	
25	Juan Minetti S.A.	Bienes Raíces	11,31%	Sí
26	Capex S.A.	Electricidad	10,73%	
27	Euromayor S.A.	Bienes Raíces	9,35%	
28	Grupo Clarín S.A.	Telecomunicaciones - Medios	9,00%	
29	Quickfood S.A. Ordinarias Clase B	Manufactura	8,97%	
30	Metrovías S.A.	Transporte - Infraestructura	8,55%	Sí
31	Metrogas S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	8,13%	
32	BBVA Banco Francés S.A.	Bancario	7,50%	
33	Banco Hipotecario Nac. S.A.	Bancario	4,87%	
34	IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	Bienes Raíces	4,47%	
35	Central Puerto S.A.	Electricidad	3,95%	Sí
36	Tenaris S.A.	Siderúrgica	3,49%	
37	Cresud S.A.	Agronegocios	3,33%	
38	Alto Palermo S.A.	Bienes Raíces	2,22%	
39	Petrobrás Energía S.A.	Petróleo, Gas y Petroquímica	0,95%	

Fuente: ANSeS

## Anexo B: Directores nombrados por la ANSeS en empresas privadas, al 15/04/09

#	Empresa	Cargo	Nombre
1	Banco Macro	Director Titular	Álvarez, Hugo
2	Camuzzi Gas Pampeana S.A.	Director Titular	Bañuelos, Héctor Horacio
3	Central Puerto S.A.	Director Titular	Luicen, Edgardo
4	Consultatio S.A.	Director Titular Síndico Titular Síndico Suplente	Meana Alconada, Jorge Stock, Guillermo Eckard, María Rosa
5	Distribuidora Gas Cuyana	Director Titular Director Suplente Síndico Titular Síndico Suplente	Leguizamón, Ernesto Guillermo Vitulo, Luis Alberto Fuks, Néstor Luis Gonzales, Francisco Daniel
6	Edenor S.A.	Director Titular Director Suplente Síndico Titular Síndico Suplente	Quilmes, Eduardo Orlando Mancuso, Rafael Ángel Pardo, Jorge Roberto Turri, Alejandro Gabriel
7	Endesa Costanera S.A.	Director Titular Director Suplente Síndico Titular Síndico Suplente	Dassensich, Simón Camacho, Damián Lisjek, Ada Roisetul Williams, Alejandro Mario
8	Gas Natural BAN	Director Titular Director Suplente	Bassi, Rubén Camacho, Damián
9	Juan Minetti S.A.	Director Titular	Peirano, Miguel
10	Metrovías S.A.	Director Titular Director Suplente Síndico Titular Síndico Suplente	García Vilas, Hernán Federico Ferré, María Liliana Vitulo, Luis Alberto Camacho, Damián
11	S.A. San Miguel	Director Titular	Patrouilleau, Rubén Darío
12	Siderar S.A.	Director Titular	Ferrer, Aldo
13	Solvay Indupa S.A.	Director Titular	Vargas, Ricardo
14	Transportadora de Gas del Norte S.A.	Director Titular Director Suplente	Leguizamón, Luis Garetto, Alejandro
15	Transener S.A.	Director Titular Director Suplente Síndico Titular Síndico Suplente	Pierro, Santiago Vitulo, Luis Alberto Bertone, Orlando Nicolás Yannuzzi, Celia Elena
16	Transportadora de Gas del Sur S.A.	Director Titular Director Suplente Síndico Titular Síndico Suplente	Mirmi, Miguel Eduardo Leguizamón, Ernesto Guillermo Roisetul Williams, Alejandro Mario Gonzales, Francisco Daniel

Fuente: ANSeS

**Promoviendo en la región democracias de mercado  
comprometidas internacionalmente con los derechos humanos.**



Av. Roque Sáenz Peña 628 piso 2º Of. R  
(C1035AAO) Buenos Aires - Argentina  
Tel: (54-11) 4343-1447 - Fax: (54-11) 4343-1554  
E-mail: [centro@cadal.org](mailto:centro@cadal.org)

## Por qué apoyar a CADAL

- √ “Porque quiero un país y una región donde se respeten las libertades democráticas fundamentales, se garantice la vigencia del estado de derecho y se implementen políticas públicas sensatas”
- √ “Porque quiero una apertura política en la cual prevalezcan la tolerancia, el diálogo y la búsqueda de consensos que ayudan a la gobernabilidad; con partidos modernos y competitivos; y con una administración pública transparente y meritocrática”
- √ “Porque quiero una apertura económica que favorezca al clima de negocios; brindando seguridad jurídica y alentando la inversión privada que genera empleo genuino, reduce la pobreza y mejora la calidad de vida de las personas”
- √ “Porque quiero una apertura global que garantice la libre circulación de los bienes y las personas, y un mundo donde dejen de existir las dictaduras de cualquier tipo”
- √ “Porque quiero fortalecer la sociedad civil alentando la vocación cívica e inculcando en los jóvenes los valores de la democracia liberal”
- √ “Porque valoro el estilo de emprendedores de las ideas que caracteriza a CADAL”

**Sí, deseo apoyar a CADAL!**

---

Para realizar una donación, por favor complete los siguientes datos, envíelos por fax al 4343-1554 o por e-mail a [centro@cadal.org](mailto:centro@cadal.org) y un representante de CADAL se pondrá en contacto con usted.

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Teléfono/s: \_\_\_\_\_

Donación Anual a realizar: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_